

9ª REUNION — 7ª SESION ORDINARIA — JUNIO 13 Y 14 DE 1984

Presidencia de los señores diputados Roberto Pascual Silva y Adam Pedrini

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ABBIATE, Alejandro Abel Alberto
ABDALA, Luis Oscar
ABDALA, Oscar Tupic
ACEVEDO de BIANCHI, Carmen Beatris
AGUILAR, Ramón Rosa
ALAGIA, Ricardo Alberto
ALBAERACIN, Ignacio Arturo
ALIAS, Manuel
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALTAMIRANO, Amado Héctor Heriberto
ALVAREZ, Adrián Carlos
ALVAREZ, Roberto Pedro
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARÁOZ, Julio César
ARRECHEA, Ramón Rosaura
ASENSIO, Luis Asterio
AUSTERLITZ, Federico
AZCONA, Vicente Manuel
BAGLINI, Raúl Eduardo
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio
BARBITO, Juan Carlos
BASUALDO, Héctor Alfredo
BECERRE, Carlos Armando
BELARRINAGA, Juan Bautista
BEREL, Ricardo Alejandro
BIANCHI, Carlos Humberto
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, José Celestino
BODO, Rodolfo Luis
BONINO, Alberto Cecilio
BONOMI, Nora Susana
BORDÓN GONZÁLEZ, José Octavio
BRITO LIMA, Alberto
BRITOS, Oscar Felipe
BULACIO, Julio Segundo
CABELLO, Luis Victorina
CAFERRI, Oscar Néstor
CAMISAR, Osvaldo
CAMPS, Alberto Germán
CANICOBIA, Ramón Héctor Pedro
CANTOR, Rubén
CAPUANO, Pedro José
CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
CAEMONA, Jorge
CARRANZA, Florencia

CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASALE, Luis Santos
CASSIA, Antonio
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, Miguel Ángel
CAVALLARI, Juan José
CAVALLARO, Antonio Gino
CONTE, Augusto
COPELLO, Norberto Luis
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORTESE, Lorenzo Juan
CORTINA, Julio
CORZO, Julio César
COSTARELLI, José
CHEHIN Jorge Victor
DALMAU, Héctor Horacio
DAUD, Ricardo
DEBALLI, Héctor Gino
DE LA VEGA de MALVASIO, Lily M. D.
DE NICHILLO, Cayetano
DÍAZ de AGÜERO, Dolores
DÍAZ LECAM, Juan Antonio
DI CIO, Héctor
DIMASI, Julio Leonardo
DOMÍNGUEZ FERREYRA, Dardo N.
DONAIRES, Fernando
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
DRUETTA, Raúl Augusto
DUSSOL, Ramón Adolfo
ELIZALDE, Juan Francisco Carmelo
FAPPIANO, Oscar Luján
FEDERIK, Carlos Alberto
FERRE, Carlos Eduardo
FINO, Torcuato Enrique
FLORES, Aníbal Eulogio
FURQUE, José Alberto
GARCIA, Antonio Matías
GARCIA Roberto Juan
GHIANO, Jorge Osvaldo
GIMENEZ, Jacinto
GINZO, Julio José Oscar
GÓMEZ MIRANDA, María Florentina
GONZÁLEZ, Arnaldo
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Jesús Jerónimo
GONZÁLEZ, Raúl Héctor
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás Walther
GONZÁLEZ PASTOR, Carlos María
GOROSTEGUI, José Ignacio

GOTI, Erasmo Alfredo
GRIMAU, Arturo Aníbal
GUATTI, Emilio Roberto
GURIOLI, Mario Alberto
GUTIERREZ, Reynaldo Pastor
GUZMAN, María Cristina
HERRERA, Bernardo Eligio
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
INGARAMO, Emilio Felipe
JALILE, José Félix
JAROSLAVSKY, César
JIMÉNEZ, Francisco Javier
KHOURY, Miguel Angel
LANDÍN, José Miguel
LANGAN, Roberto José
LAZCOZ, Hernaldo Efraín
LEALE, Zelmar Rubén
LENCINA, Luis Ascensión
LEPORI, Pedro Antonio
LESCANO, David
LESTANI, Carlos
LIPTAK, Teodoro
LÓPEZ Santiago Marcelino
LUGONES, Horacio Emerico
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANNY, José Juan
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MARCHESINI, Victor Carlos
MARTIN Belarmino Pedro
MARTINEZ Valentín del Valle
MARTINEZ MARQUEZ, Miguel José
MARTINEZ MARTINOLI, Fausta G.
MASINI, César Francisco
MASTOLORENZO, Vicente
MATUS, Salvador León
MATZKIN, Jorge Rubén
MAYA, Héctor María
MEDINA, Miguel Heraldo
MELÓN, Alberto Santos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MILANO, Raúl Mario
MINICHILLO, Juan José
MIRANDA, Julio Antonio
MONSERAT, Miguel Pedro
MONTERO, Carlos L.
MOSSO, Alfredo Miguel

MOTHE, Félix Justiniano
 NADAL, Marx José
 NEGRI, Arturo Jesús
 NIEVA, Próspero
 ORGAMBIDE, Luis Oscar
 PAPAGNO, Rogelio
 PATINO, Artemio Agustín
 PECHE, Abdol Carim Mahomed
 PEDRINI, Adam
 PELAEZ, Anselmo Vicente
 PEPE, Lorenzo
 PÉREZ, René
 PÉREZ VIDAL, Alfredo
 PERL, Néstor
 PINTOS, Carlos María Jesús
 PIUCILL, Hugo Diógenes
 PLANELL, Mariano Juan
 PRADO, Leonardo Ramón
 PRONE, Alberto José
 PUPILLO, Liborio
 PURITA, Domingo
 RABANAL, Rubén Francisco
 RADONJIC, Juan
 RAMOS, Daniel Omar
 RAPACINI, Rubén Abel
 RATKOVIC, Milivoj
 RAUBER, Cleto
 REALI, Raúl
 REGGERA, Esperanza
 REYNOSO, Adolfo
 RIGATUO, Tránsito
 RIQUEZ, Félix
 RIUTORI de FLORES, Olga Elena
 ROBERTO, Mario
 ROBSON, Anthony
 RODRÍGUEZ, Antonio Abel
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, Manuel Alberto

RODRÍGUEZ ARTUSI, José Luis
 ROMANO, Domingo Alberto
 ROMERO, Antonio Elías
 ROMERO, Francisco Telmo
 RUBIO, Luis
 RUIZ, Angel Horacio
 SABADINI, José Luis
 SALDUNA, Bernardo Ignacio Ramón
 SARQUIS, Guillermo Carlos
 SCEIOL, Carlos María
 SCIURANO, Adolfo
 SELLA, Orlando Enrique
 SERRAIA, Miguel Jorge
 SILVA, Roberto Pascual
 SILVERO, Lisandro Antonio
 SOCCI, Hugo Alberto
 SOLARI BALLESTEROS, Alejandro
 SPINA, Carlos Guido
 SRUR, Miguel Antonio
 STAVALE, Juan Carlos
 STOKINER, Jorge
 STORANI, Federico Teobaldo M.
 STUBBIN, Adolfo Luis
 SUAREZ, Lionel Armando
 TABASCO, Oscar
 TAIBO, Nicolás
 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TERRILE, Ricardo Alejandro
 TORRESAGASTI, Adolfo
 TOSI, Santiago D.
 URRIZA, Luis María
 VANOSSI, Jorge Reinaldo
 VIDAL, Carlos Alfredo
 VISTALLI, Francisco José
 VON NIEDERHÄUSERN, Norberto B
 YAMAGUCHI, Jorge Rokuro
 ZAVALEY, Jorge Hernán
 ZINGALE, Felipe
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

BERNASCONI, Tulio Marón
 PONCE, Rodolfo Antonio
 PUGLIESE, Juan Carlos
 RODRÍGUEZ, Pedro Salvador
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo

AUSENTES, CON LICENCIA:

BOTTA, Felipe Esteban
 BRIZ de SANCHEZ, Onofre
 BRIZUELA, Juan Arnaldo
 COLOMBO, Ricardo Miguel
 CONNOLLY, Alfredo Jorge
 CORPACCI, Sebastián Alejandro
 FALCIONI de BRAVO, Ivelise Ilda
 FIGUEROA de TOLOZA, Emma
 GARCÍA, Carlos Euclides
 IMBELLONI, Norberto
 MOREAU, Leopoldo Raúl
 PEREYRA, Pedro Armando
 RUIZ, Osvaldo Cándido
 SARUBI, Pedro Alberto
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 STUBBIN, Marcelo

AUSENTES, CON AVISO:

CACERES, Luis Alberto
 GUELAR, Diego Ramiro
 MEDINA, Alberto Fernando
 MORAGUES, Miguel José
 PALEARI, Antonio
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 SANCHEZ TORANZO, Nicasio
 TORRES, Carlos Martín
 UNAMUNO, Miguel

SUMARIO

- 1.—Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 1386.)
- 2.—Versiones taquigráficas. (Pág. 1386.)
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensajes del Poder Ejecutivo:

- 1.—Mensaje 1.697 y proyecto de ley: aprobación del régimen de elecciones para las asociaciones profesionales de trabajadores que figura como anexo 1 del decreto 1.696/84 (9-P.E.-84). (Pág. 1387.)

II.—Comunicaciones del Honorable Senado. (Pág. 1390.)

III.—Dictámenes de comisiones. (Pág. 1390.)

IV.—Dictámenes observados. (Pág. 1391.)

V.—Comunicaciones de comisiones. (Pág. 1391.)

VI.—Comunicaciones de señores diputados. (Página 1391.)

VII.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 1391.)

VIII.—Proyectos de ley:

- 1.—Del señor diputado Sciurano y otros: subsidio al Club Andino, de Ushuaia, territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (546-D.-84). (Pág. 1393.)
- 2.—Del señor diputado Blanco: adecuación tecnológica de la Biblioteca del Congreso de la Nación a fin de que cuente con un sistema de computación (549-D.-84). (Pág. 1393.)
- 3.—Del señor diputado Blanco: sistema de becas de estudios superiores para hijos de trabajadores (550-D.-84). (Pág. 1394.)
- 4.—Del señor diputado Rigatuso: cómputo del período de inactividad de los trabajadores cesantes o prescindibles por causas políticas o gremiales y reapertura de expedientes administrativos en los que se tramiten beneficios previsionales (553-D.-84). (Página 1395.)
- 5.—De los señores diputados García (A. M.) y Flores: subsidio al Consejo Escolar del distrito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires (554-D.-84). (Pág. 1395.)

ley de los señores diputados Rigatuso y Bisciotti por el que se prorrogan por diez años las pensiones graciables que hayan caducado o caduquen durante el transcurso del corriente año. Se sanciona. (Pág. 1515.)

10.—Consideración del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley de los señores diputados Pepe y Maya por el que se otorga pensión graciable vitalicia a doña Clara Iturraspe de Jaureche. Se sanciona con una modificación. (Pág. 1516.)

11.—Consideración del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley de los señores diputados Pepe y Maya por el que se otorga pensión graciable vitalicia a doña Mercedes Comaleras de Scalabrini Ortiz. Se sanciona con una modificación. (Pág. 1518.)

12.—Consideración del dictamen de la Comisión de Energía y Combustibles en el proyecto de declaración del señor diputado Cassia por el que se solicita del Poder Ejecutivo que declare de interés nacional la participación argentina en la IV Exposición Latinoamericana de Petróleo, a realizarse en Caracas, República de Venezuela, en el mes de junio de 1984. Se sanciona. (Pág. 1519.)

13.—Consideración del proyecto de declaración del señor diputado González (R. H.) y otros, de reafirmación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y declaración a los pueblos de América latina. Se sanciona. (Pág. 1519.)

14.—Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Turismo y Deportes en el proyecto de declaración del señor diputado Purita por el que se solicita al Poder Ejecutivo la creación de una comisión encargada de analizar medidas para prevenir y sancionar hechos de violencia en los estadios de fútbol. Se sanciona. (Pág. 1522.)

15.—Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado López con motivo de manifestaciones del contralmirante Horacio A. Mayorga. Se sanciona con una modificación. (Pág. 1522.)

16.—Consideración del proyecto de declaración de los señores diputados Martínez Márquez y Prone sobre definición por el Ministerio de Salud y Acción Social de las pautas de su accionar con relación al Departamento de Diagnóstico y Tratamiento del Servicio Nacional de Chagas, de la ciudad de Córdoba. Se sanciona. (Pág. 1526.)

17.—Consideración del proyecto de declaración del señor diputado Druetta y otros por el que se solicita del Poder Ejecutivo que declare de interés nacional la conmemoración del Grito de Alcorta, el día 25 de junio. Se sanciona. (Pág. 1527.)

18.—Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en las enmiendas introducidas por el Ho-

norable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se aprueba el régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales instituido por el decreto 154/83. Se sanciona definitivamente (ley 23.068). (Página 1527.)

19.—Consideración del proyecto de declaración del señor diputado Ferré y otros por el que se expresa la satisfacción de la Honorable Cámara por el acuerdo suscrito entre las fuerzas políticas y el Poder Ejecutivo nacional el día 7 de junio del corriente año. Se sanciona. (Pág. 1543.)

20.—Consideración del proyecto de declaración del señor diputado Ferré y otros de repudio al atentado perpetrado al avión en que debían viajar la señora María Estela Martínez de Perón, legisladores nacionales y otras autoridades. Se sanciona. (Página 1559.)

21.—Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación Penal en el proyecto de declaración del señor diputado Cortese sobre constitución por el Poder Ejecutivo de una comisión reformadora de las leyes penales. (Pág. 1559.)

22.—Apéndice:

I.—Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 1567.)

II.—Inserciones. (Pág. 1570.)

—En Buenos Aires, a los trece días del mes de junio de 1984, a la hora 18 y 50:

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Silva). —Queda abierta la sesión con la presencia de 142 señores diputados.

Invito al señor diputado por el distrito electoral de Córdoba don Carlos Armando Becerra a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, el señor diputado Carlos Armando Becerra procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

VERSIONES TAQUIGRAFICAS

Sr. Presidente (Silva). —Si no se formulan observaciones a la versión taquigráfica correspondiente a la sesión del día 9 de mayo, se autenticará y archivará.

Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

17

CONMEMORACION DEL GRITO DE ALCORTA

Sr. Presidente (Silva). — Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor diputado Druetta y otros señores diputados por el que se solicita del Poder Ejecutivo que declare de interés nacional la conmemoración del Grito de Alcorta el día 25 de junio.

Por Secretaría se dará lectura del proyecto.

Sr. Secretario (Belnicoff). — Dice así:

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional declarara de interés nacional la conmemoración del "Grito de Alcorta", día 25 de junio, disponiendo su festejo en establecimientos educacionales, oficinas públicas nacionales, etcétera, así como toda otra acción que contribuya al esclarecimiento de la comunidad sobre la significación de dicha gesta en nuestra historia, auspiciando todo tipo de actos recordatorios de la fecha.

Raúl A. Druetta. — Miguel J. Serralta. — Mario A. Guroili.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Hay pocas fechas en la historia de los pueblos que son dignas de festejo y reconocimiento público. En nuestro país, dentro de las gestas de la civilidad con contenido revolucionario y de trascendencia plenamente vigente, debemos considerar a la rebelión de los colonos arrendatarios rurales del 25 de junio de 1912, más conocida por el "Grito de Alcorta".

Dicha gesta, mundialmente conocida, fue germen de organizaciones del campo como la Federación Agraria Argentina pero, por sobre todas las cosas, constituye el origen del movimiento agrario argentino a partir del cual se han ido incorporando a la comunidad rural la justicia y la dignidad del trabajo mediante la organización libre de cooperativas u otras asociaciones que aglutinan a gran cantidad de productores agropecuarios, y sobre cuya vigencia social resultaría obvio redundar.

Raúl A. Druetta. — Miguel J. Serralta. — Mario A. Guroili.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración.

Se va a votar.

—Se aprueba en general y en particular.

Sr. Presidente (Silva). — Queda sancionado el proyecto de declaración¹.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 1568.)

18

REGIMEN PROVISORIO DE NORMALIZACION DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

(Orden del Día Nº 190)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación ha considerado las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, sobre aprobación del régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales, instituido por el decreto 154/83; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su aceptación.

Sala de la comisión, 30 de mayo de 1984.

Adolfo L. Stubrin. — Julio S. Bulacio. — Carlos A. Becerra. — Juan J. Cavallari. — Dolores Díaz de Agüero. — Julio L. Dimast. — José F. Jalile. — Hernaldo E. Lazcoz. — Raúl M. Milano. — Próspero Nieva. — René Pérez. — Federico T. M. Storani.

En disidencia parcial:

Adolfo Torresagasti. — Marcelo M. Arabolaza. — Héctor H. Dalmau. — Arturo A. Grimaux. — Artemio A. Patiño. — Esperanza Reggera. — Orlando E. Sella. — Jorge R. Yamaguchi.

Buenos Aires, 22 de marzo de 1984.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en sesión del 21 del corriente, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre normalización de las universidades nacionales y ha tenido a bien aprobarlo en la fecha de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase como régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales, hasta tanto se dicte la correspondiente ley de fondo, el establecido en el decreto 154/83, con las modificaciones establecidas en la presente ley.

La normalización a que se refiere este régimen se cumplirá en el plazo de un año, prorrogable por otro plazo no mayor de 180 días, si las circunstancias así lo hicieren necesario, a contar desde la vigencia de la presente ley.

Art. 2º — Se restablece la vigencia de los estatutos que regían en las universidades nacionales al 29 de julio de 1966, en tanto sus disposiciones no se opongan a la presente ley.

Art. 3º — Derógase la ley de facto 22.207.

Art. 4º — El Poder Ejecutivo podrá intervenir las universidades nacionales durante el tiempo que determine la presente ley y en los siguientes casos:

- a) Notorio incumplimiento de la presente ley;
- b) Riesgo inminente de alteración del orden público;
- c) Conflicto insoluble dentro de la universidad;
- d) Grave conflicto de competencia con los poderes del Estado.

Art. 5º — Al rector normalizador le corresponde:

- a) La representación de la universidad y el ejercicio de la jurisdicción superior universitaria;
- b) Convocar al Consejo Superior Provisorio a sesiones ordinarias o extraordinarias, presidir sus deliberaciones y ejecutar sus resoluciones;
- c) Ejercer la conducción administrativa, económica y financiera de la universidad y supervisar la de las unidades académicas;
- d) Organizar la secretaría de la universidad y del rectorado, designar y remover a sus titulares, cuyos cargos serán docentes;
- e) Resolver cualquier cuestión urgente o grave debiendo dar cuenta oportunamente al Consejo Superior Provisorio;
- f) Firmar los títulos, diplomas, distinciones y honores universitarios;
- g) Conducir las actividades académicas de la universidad;
- h) Designar y remover al personal cuyo nombramiento no corresponda a otros órganos, de acuerdo con los respectivos estatutos vigentes;
- i) Ejercer la jurisdicción disciplinaria;
- j) Ejercer las demás atribuciones que, de acuerdo con esta ley, le asigne el estatuto.

Art. 6º — Al Consejo Superior Provisorio corresponde:

- a) Establecer las modificaciones que se consideran necesarias a los estatutos universitarios puestos en vigencia, los que serán elevados a los fines de su aprobación al Ministerio de Educación y Justicia;
- b) Proponer al Ministerio de Educación y Justicia la creación, división, fusión o supresión de facultades o unidades académicas equivalentes;
- c) La suspensión o separación del rector, vicerrector o de los decanos por las causas previstas en el respectivo estatuto, en sesión especial convocada al efecto y por la mayoría de dos tercios de votos;
- d) Conocer, en el caso de intervención a unidades académicas, sobre el recurso de apelación, que hubieran interpuesto las autoridades intervenidas, las que tendrán voz pero no voto, en la correspondiente sesión especial;

- e) Dictar su reglamento interno y aquellos reglamentos y ordenanzas necesarios para el régimen común de los estudios y disciplinas generales de la universidad;
- f) Orientar la gestión académica, homologar los planes de estudio y establecer normas generales de reválida;
- g) Proponer al Ministerio de Educación y Justicia la fijación y el alcance de los títulos y grados y, en su caso, las incumbencias profesionales de los títulos correspondientes a las carreras;
- h) Designar, a propuesta del decano normalizador respectivo, a los miembros del tribunal académico y a los jurados para los concursos;
- i) Aprobar, a propuesta del rector, el presupuesto de la universidad, sus ajustes y modificaciones, en los casos que corresponda, para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional;
- j) Resolver las propuestas de nombramiento y remoción de profesores ordinarios y extraordinarios y decidir respecto de sus renunciaciones;
- k) Aceptar herencias, legados y donaciones.

Art. 7º — El decano normalizador tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Representar a la facultad o unidad académica equivalente;
- b) Presidir el Consejo Académico Normalizador Consultivo y convocarlo a sesiones ordinarias y extraordinarias;
- c) Ejercer la conducción administrativa, económica y financiera de la facultad con arreglo a los estatutos vigentes;
- d) Dirigir, coordinar, supervisar y orientar la actividad académica;
- e) Organizar las secretarías de la facultad; designar y remover a sus titulares y demás personal no docente, de acuerdo con los estatutos vigentes, siempre que no se opongan a las disposiciones de la presente ley;
- f) Proponer al Consejo Superior Provisorio:
 1. Los planes de estudio, la creación y supresión de carreras y doctorados y el alcance de los títulos.
 2. El nombramiento y la remoción de profesores ordinarios y extraordinarios y decidir sobre la promoción de juicios académicos.
 3. La designación de los miembros del tribunal académico y jurados para los concursos docentes;
- g) Aprobar los programas de estudio;
- h) Designar y remover a los profesores interinos, contratados y a docentes auxiliares;
- i) Adoptar las decisiones y medidas necesarias para la ejecución de las resoluciones emanadas del Consejo Superior Provisorio;
- j) Ejercer la jurisdicción disciplinaria;

- k) Presentar al Consejo Superior Provisorio el presupuesto anual de gastos, previa notificación al Consejo Académico Normalizador Consultivo;
- l) Determinar la época de exámenes, número de turnos y su respectivo orden;
- m) Resolver cualquier cuestión de carácter urgente y grave, debiendo informar posteriormente al Consejo Académico Normalizador Consultivo;
- n) Las que de acuerdo a la presente ley le asigne el estatuto vigente.

Art. 8º — Cada universidad asegurará la participación de los docentes en los Consejos Superiores Provisorios, determinando su número y forma de elección por los respectivos claustros. La incorporación de los docentes designados se hará dentro de los sesenta (60) días de promulgada esta ley.

Art. 9º — Los concursos sustanciados durante el gobierno de facto podrán ser impugnados a pedido de parte interesada, dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley.

Art. 10. — Dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley, cada universidad asegurará la existencia de un régimen de reincorporación que contemple la situación del personal docente y no docente cesanteado, prescindido u obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos, reconociendo las categorías al momento de las cesantías y computándosele la antigüedad hasta el momento de su reincorporación, que no deberá exceder los noventa (90) días de promulgada la presente ley.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

VÍCTOR H. MARTÍNEZ.
Antonio J. Macris.

INFORME

Honorable Cámara:

El Honorable Senado de la Nación ha introducido modificaciones al proyecto de ley sobre normalización de las universidades nacionales que elevara esta Honorable Cámara de Diputados. Este proyecto declaraba como régimen provisorio, hasta tanto se dicte la ley de fondo correspondiente, el establecido en el decreto 154/83 del Poder Ejecutivo; restablecía la vigencia de los estatutos universitarios que regían en la universidades nacionales al 29 de julio de 1966 y derogaba parcialmente la ley de facto 22.207, dejando en vigencia los artículos 7º, 43, 48, 51, 54 y 58 de dicha ley.

El Honorable Senado deroga lisa y llanamente la ley de facto 22.207, pero mantiene básicamente los contenidos de la ley de facto y realiza algunas modificaciones de los artículos mencionados. Estas últimas se orientan a fortalecer la autonomía de las universidades o avanzan en las facultades que se les otorgan a las casas de estudio durante el período de normalización. Además, incluye nuevas cláusulas referentes a la revisión de los concursos sustanciados bajo el imperio de la ley de facto, agregando la posibilidad de la impugnación a pedido de parte interesada e introduce disposiciones

sobre reincorporación de personal docente o no docente cesanteado, prescindido u obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos.

En la sanción del Honorable Senado los tres artículos iniciales especifican las normas que regirán durante el período de normalización de las universidades nacionales, las que se integran con: las disposiciones del decreto 154/83; las modificaciones que introduce el proyecto del Senado y las normas de los estatutos universitarios que regían en las casas de estudio al 29 de julio de 1966, con las modificaciones que introduce este proyecto.

El artículo 1º sancionado por el Senado mantiene los principios y el texto de la sanción de Diputados: "Declárase como régimen provisorio de las universidades nacionales, hasta tanto se dicte la ley de fondo, el establecido por el decreto 154/83". La sanción del Senado agrega: "con las modificaciones establecidas en la presente ley", puesto que deroga lisa y llanamente la ley de facto 22.207 y especifica para este período de normalización las causales de intervención a las universidades nacionales (artículo 4º), las atribuciones de los Rectores Normalizadores (artículo 5º), de los Consejos Superiores Provisorios (artículo 6º) y de los Decanos Normalizadores (artículo 7º). Con estas modificaciones deja sin efecto la primera parte del artículo 3º del proyecto sancionado por esta Cámara, que mantenía vigentes algunos artículos de la ley de facto: el artículo 7º sobre las causales de intervención, el artículo 43 sobre atribuciones de las asambleas universitarias, el artículo 48 sobre atribuciones del rector, el artículo 51 sobre atribuciones de los consejos superiores, el artículo 54 sobre atribuciones de los decanos y el artículo 58 sobre las de los consejos académicos. Es decir, que clarifica y sistematiza los órganos de gobierno y sus atribuciones durante el período de normalización.

El artículo 2º sancionado por el Senado, mantiene el texto del anterior 2º del proyecto de esta Honorable Cámara en que "se restablece la vigencia de los estatutos que regían en las universidades nacionales al 29 de julio de 1966", y le introduce la aclaración de los límites de sus alcances al agregar que serán validadas todas sus normas "en tanto no se opongan a las disposiciones de la presente ley".

El proyecto que viene del Senado especifica el plazo en que se deberá efectuar la normalización de las universidades nacionales; se deberá cumplir en un año, prorrogable por otro período no mayor de ciento ochenta días, si las circunstancias lo hicieran así necesario; este plazo comienza a contar a partir de la promulgación de la ley.

Dadas las características del trámite parlamentario seguido, en que el decreto del Poder Ejecutivo luego pasa a ser la base del régimen provisorio que la Honorable Cámara de Diputados aprueba y que al pasar al Senado sufre modificaciones, que afectan tanto al articulado enviado por esta Honorable Cámara, tal como ya ha sido especificado, pero también, al mismo tiempo, al régimen de base contenido en el decreto original del Ejecutivo. Se ha considerado útil desarrollar una sistemática de las disposiciones vigentes en este régimen de normalización universitaria, que está integrada por las disposiciones del decreto 154/83 y de los agregados introducidos en la revisión que viene del Senado a consideración de esta Honorable Cámara, de

manera tal de facilitar el tratamiento y posterior interpretación de las disposiciones que se sancionan. Dicha sistemática ordena las normas que resultan vigentes de acuerdo con los siguientes grandes temas: régimen legal, plazo, intervención de las universidades nacionales, rectores normalizadores, consejos superiores provisorios, decanos normalizadores, consejos académicos normalizadores consultivos, concursos y reincorporaciones, centros de estudiantes y docentes y abolición de discriminaciones.

El régimen legal

Intervienen las universidades nacionales, a cuyo fin se designarán rectores normalizadores (decreto 154/83, artículo 1º).

Declárase como régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales, hasta tanto se dicte la correspondiente ley de fondo, el decreto 154/83, con las modificaciones establecidas en la presente ley (Senado, artículo 1º).

Se restablece la vigencia de los estatutos que regían en las universidades nacionales al 29 de julio de 1966, en tanto sus disposiciones no se opongan a la presente ley (Senado, artículo 2º).

Debiendo las universidades creadas con posterioridad a esa fecha adoptar, entre ellos, el que resulte más apropiado a sus fines (decreto 154/83, artículo 4º).

Derógase la ley de facto 22.207 (Senado, artículo 3º).

Plazo

La normalización a que se refiere este régimen se cumplirá en el plazo de un año, prorrogable por otro plazo no mayor de 180 días, si las circunstancias así lo hicieren necesario, a contar desde la vigencia de la presente ley (Senado, artículo 1º).

Intervención a las universidades nacionales

El Poder Ejecutivo podrá intervenir las universidades nacionales durante el tiempo que determine la presente ley y en los siguientes casos:

- a) Notorio incumplimiento de la presente ley;
- b) Riesgo inminente de alteración del orden público;
- c) Conflicto insoluble dentro de la universidad;
- d) Grave conflicto de competencia con los poderes del Estado (Senado, artículo 4º).

Rector normalizador

Al rector normalizador le corresponde:

- a) La representación de la universidad y el ejercicio de la jurisdicción superior universitaria;
- b) Convocar al Consejo Superior Provisorio a sesiones ordinarias o extraordinarias; presidir sus deliberaciones y ejecutar sus resoluciones;
- c) Ejercer la conducción administrativa, económica y financiera de la universidad y supervisar la de las unidades académicas;

d) Organizar la Secretaría de la Universidad y del Rectorado; designar y remover a sus titulares, cuyos cargos serán docentes;

e) Resolver cualquier cuestión urgente o grave, debiendo dar cuenta oportunamente al Consejo Superior Provisorio;

f) Firmar los títulos, diplomas, distinciones y honores universitarios;

g) Conducir las actividades académicas de la universidad;

h) Designar y remover al personal cuyo nombramiento no corresponde a otros órganos, de acuerdo con los respectivos estatutos vigentes;

i) Ejercer la jurisdicción disciplinaria;

j) Ejercer las demás atribuciones que, de acuerdo con esta ley, le asigne el estatuto (Senado, artículo 5º).

Consejos superiores provisorios. — Composición

Se constituirán consejos superiores provisorios en cada universidad, los que estarán integrados por el rector normalizador y los decanos normalizadores conjuntamente con el presidente y dos delegados de la federación de estudiantes correspondiente (decreto 154/83, artículo 5º).

Cada universidad asegurará la participación de los docentes en los consejos superiores provisorios, determinando su número y forma de elección por los respectivos claustros. La incorporación de los docentes designados se hará dentro de los 60 días de promulgada esta ley (Senado, artículo 8º).

El Consejo Superior Provisorio de cada universidad dictará una reglamentación especial, la que deberá ser aprobada por el Ministerio de Educación y Justicia, a los fines de establecer cómo se constituirán los respectivos claustros durante este proceso de normalización (decreto 154/83, artículo 5º).

Atribuciones

Al Consejo Superior Provisorio corresponde:

a) Establecer las modificaciones que se consideran necesarias a los estatutos universitarios puestos en vigencia, los que serán elevados a los fines de su aprobación al Ministerio de Educación y Justicia;

b) Proponer al Ministerio de Educación y Justicia la creación, división, fusión o supresión de facultades o universidades académicas equivalentes;

c) La suspensión o separación del rector, vicerrector o de los decanos por las causas previstas en el respectivo estatuto, en sesión especial convocada al efecto y por mayoría de los dos tercios de votos;

d) Conocer en caso de intervención a unidades académicas sobre el recurso de apelación que hubieren interpuesto las autoridades intervenidas, las que tendrán voz pero no voto, en la correspondiente sesión especial;

e) Dictar su reglamento interno y aquellos reglamentos y ordenanzas necesarios para el régimen común de los estudios y disciplinas generales de la universidad;

- f) Orientar la gestión académica, homologar los planes de estudio y establecer normas generales de reválida;
- g) Proponer al Ministerio de Educación y Justicia la fijación y el alcance de los títulos y grados y, en su caso, las incumbencias profesionales de los títulos correspondientes a las carreras;
- h) Designar a propuesta del decano normalizador respectivo, a los miembros del tribunal académico y a los jurados para los concursos;
- i) Aprobar a propuesta del rector el presupuesto de la universidad, sus ajustes y modificaciones en los casos que corresponda, para su posterior elevación al Poder Ejecutivo;
- j) Resolver las propuestas de nombramiento y remoción de profesores ordinarios y extraordinarios y decidir respecto de sus renunciaciones;
- k) Aceptar herencias, legados y donaciones (Senado, artículo 6º).

Decanos normalizadores. — Designación

Los decanos normalizadores de cada facultad serán designados por el Ministerio de Educación y Justicia a propuesta del rector normalizador (decreto 154/83, artículo 3º).

Atribuciones

El decano normalizador tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Representar a la facultad o unidad académica equivalente;
- b) Presidir el Consejo Académico Normalizador Consultivo y convocarlo a sesiones ordinarias y extraordinarias;
- c) Ejercer la conducción administrativa, económica y financiera de la facultad con arreglo a los estatutos vigentes;
- d) Dirigir, coordinar, supervisar y orientar la actividad académica;
- e) Organizar las secretarías de la facultad; designar y remover a sus titulares y demás personal no docente, de acuerdo con los estatutos vigentes, siempre que no se opongan a las disposiciones de la presente ley;
- f) Proponer al Consejo Superior Provisorio:

1. Los planes de estudio, la creación y supresión de carreras y doctorados y el alcance de los títulos.
2. El nombramiento y remoción de profesores ordinarios y extraordinarios y decidir sobre la promoción de juicios académicos.
3. La designación de los miembros del tribunal académico y jurados para los concursos docentes.

- g) Aprobar los programas de estudio;
- h) Designar y remover a los profesores interinos, contratados, y a docentes auxiliares;

i) Adoptar las decisiones y medidas necesarias para la ejecución de las resoluciones emanadas del Consejo Superior Provisorio;

j) Ejercer la función disciplinaria;

k) Presentar al Consejo Superior Provisorio el presupuesto anual de gastos, previa notificación al Consejo Académico Normalizador Consultivo;

l) Determinar la época de exámenes, número de turnos y su respectivo orden;

m) Resolver cualquier cuestión urgente y grave, debiendo informar posteriormente al Consejo Académico Normalizador Consultivo;

n) Las que de acuerdo con la presente ley le asigne el estatuto vigente (Senado, artículo 7º).

Consejos Académicos Normalizadores Consultivos (CANC). — Composición

Se constituirán Consejos Académicos Normalizadores Consultivos (CANC) en cada facultad, los que estarán integrados por el decano, el presidente y dos delegados del centro de estudiantes reconocido y uno o más docentes por cada departamento (o unidad académica equivalente), en número no menor de seis (6) ni mayor de diez (10), elegidos por el decano de una lista propuesta por el claustro correspondiente. Podrá incorporarse también un delegado del centro de graduados reconocido por la facultad (decreto 154/83, artículo 6º).

Concursos

Suspéndese la sustanciación de todos los concursos universitarios (decreto 154/83, artículo 7º).

El Consejo Superior Provisorio de cada Universidad dictará normas especiales, las que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Educación y Justicia, a los fines de revisar la aparente validez de los concursos realizados bajo el imperio de la ley 22.207 (decreto 154/83, artículo 8º).

Los concursos sustanciados durante el gobierno de facto podrán ser impugnados a pedido de parte interesada, dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley (Senado, artículo 9º).

Reincorporaciones

Dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley, cada universidad asegurará la existencia de un régimen de reincorporación que contemple la situación actual del personal docente y no docente cesanteadado, prescindiendo u obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos, reconociendo las categorías al momento de la cesantía y computándosele la antigüedad hasta el momento de su reincorporación, que no deberá exceder de noventa (90) días de promulgada la presente ley (Senado, artículo 9º).

Centros de estudiantes

Reconócese los centros de estudiantes que hubieran realizado elecciones durante el último año y, en consecuencia, la legalidad de su constitución. Reconócese un

solo centro por facultad y una sola federación por universidad, y la Federación Universitaria Argentina, como órganos de representación de los estudiantes (decreto 154/83, artículo 9º).

Abolición de discriminaciones

Eliminanse todas las cláusulas discriminatorias y proscripciones, de todo tipo, para la provisión de cargos docentes y no docentes (decreto 154/83, artículo 10).

En vista de las consideraciones anteriores, que destacan este régimen de normalización como un instrumento idóneo para poner en marcha a las universidades nacionales hacia el punto de llegada que es la autonomía universitaria, se aconseja aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Adolfo L. Stubrin.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 11 de enero de 1984.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase como régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales, hasta tanto se dicte la correspondiente ley de fondo, el establecido en el decreto 154/83.

Art. 2º — Se restablece la vigencia de los estatutos que regían en las universidades nacionales al 29 de julio de 1966.

Art. 3º — Derógase la ley 22.207, manteniéndose provisoriamente las normas de sus artículos 7º, 43, 48, 51, 54 y 58; autorizándose a los consejos superiores provisorios a establecer las modificaciones que se consideren necesarias a los estatutos universitarios puestos en vigencia, los que serán elevados a los fines de su aprobación al Ministerio de Educación y Justicia.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

JUAN CARLOS PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Stubrin (A. L.). — Señor presidente: vuelvo a examen de esta Cámara el proyecto de normalización de las universidades nacionales que en su momento fuera objeto de un profundo y extenso tratamiento entre nosotros.

En el análisis y resolución de este proyecto el Honorable Senado insumió varios meses. Co-

mo producto de esa labor hoy tenemos a consideración un proyecto que en el concepto de la Comisión de Educación tiene la misma orientación que nuestra sanción anterior.

Pese a existir disidencias parciales, la comisión se pronunció a favor de la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara alta. En este sentido y por la mayoría de la comisión anticipo que somos partidarios de la aprobación del texto tal como lo aprobara el Senado a los fines de alumbrar ya mismo una ley de normalización de las universidades nacionales que satisfaga las necesidades de estos entes educativos después de casi seis meses de gobierno democrático, lográndose sancionar una regulación que les brinde suficiente jerarquía legal.

Las universidades están encaminándose por los carriles previstos en el decreto presidencial 154, que se ven ratificados por medio de este proyecto de ley.

Esto constituye una conquista de la universidad argentina en múltiples aspectos, particularmente porque se institucionalizan deseos permanentes y profundos de participación que exigen la comunidad universitaria y los establecimientos activos del quehacer educativo.

Además de dar jerarquía legal a la organización del movimiento estudiantil, que tiene un carácter democrático pluralista y abierto, resuelve el problema del orden jurídico interno de las universidades a partir de la reposición de unas normas jurídicas que fueron derogadas en su momento por un golpe militar antipopular, dotando de estatutos propios a nuestras altas casas de estudio.

Asimismo, esta ratificación del régimen fijado por el decreto 154 para la normalización de las universidades nacionales consagra el principio de no discriminación por razones ideológicas o políticas en modo expreso, lo cual significa crear las garantías suficientes para un desempeño digno tanto de la función docente como en materia de investigación, acorde con los principios de la vida republicana y democrática del país.

La sanción del Senado también recepta la revisión de los concursos celebrados en virtud de la ley 22.207, tal como lo había establecido el decreto presidencial, e incorpora a ese mecanismo —sobre el que oportunamente hemos deliberado, pronunciándonos mayoritariamente por su aprobación— un sistema de impugnación a pedido de parte interesada —que complementa adecuadamente el régimen de revisión de dichos concursos— a ser dictado por las universidades con aprobación del Ministerio de Educación.

Por otro lado, la sanción del Senado introduce una importante cláusula referida al dramático problema de los cesantes docentes y no docentes de la universidad, aspecto éste que en el momento de ser considerado por esta Cámara carecía de los ribetes de urgencia que alcanza ahora, pero que requiere una atención legislativa de estricta justicia, porque significó en su época un acto arbitrario de persecución por razones políticas e ideológicas incompatible con la vida universitaria y conducente a una segregación de los miembros docentes y no docentes de su cuerpo institucional.

En consecuencia y en homenaje a la brevedad y concisión que queremos infundir a este debate, vamos a cumplir con el informe reafirmando nuestro planteo de aprobación íntegra a esta sanción del Senado. De esta forma confirmamos el pronunciamiento que trabajosa pero concienzudamente el Honorable Senado de la Nación ha logrado por la confluencia de las distintas vertientes políticas mediante un dictamen único de su Comisión de Educación, como expresión de una forma unitaria y sintetizadora de abordar las grandes cuestiones nacionales, digna del mejor encomio por parte de esta Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sella. — Señor presidente: este proyecto de ley, que oportunamente fuera aprobado por esta Cámara y que con modificaciones también aprobara el Honorable Senado de la Nación, llega hoy nuevamente a este recinto con un despacho de la Comisión de Educación al que los justicialistas damos, en general, nuestro voto favorable. Sin embargo, conforme surge del propio despacho, presentamos disidencias en particular, las que dejaremos expuestas a la consideración de los señores diputados de todas las bancadas.

Antes de continuar quiero ratificar una vez más el pensamiento justicialista en el sentido de que la educación es una sola y debe ser permanente. Es por ello que estamos a la espera de una ley general de educación que nos permita superar todos nuestros males y adecuar la universidad a nuestro tiempo. Quiero hacer presente que la norma que estamos considerando representa un paso importante y así lo apuntamos al votar favorablemente en general el proyecto.

Señor presidente: las universidades argentinas, al igual que el país en su conjunto, han sufrido durante los siete años previos al advenimiento de la democracia un proceso de reducción cualitativa y cuantitativa, caracterizado por el régi-

men autocrático, el academicismo, el cientificismo, la falta de coordinación y participación y, en particular la carencia de todo análisis crítico sobre la realidad nacional y los problemas que agobian al pueblo argentino.

A este grave cuadro de situación debe agregarse la pretensión de los sectores universitarios adictos al proceso, que simplemente se han atrincherado en su afán de retomar el lugar que ocupaban antes del advenimiento de la democracia. Ello obliga a todos los argentinos que estamos dispuestos a defender las instituciones de la República, pero fundamentalmente al actual gobierno, a emprender una impostergable tarea de saneamiento, recuperación y jerarquización de la universidad para permitir su auténtica y eficaz integración en el proyecto político y social de las grandes mayorías nacionales.

Para el justicialismo el problema universitario es ante todo un problema político, por cuanto se inscribe en la lucha del pueblo argentino por su definitiva independencia económica, justicia social y soberanía política, por el camino de la construcción de la comunidad organizada, meta ideal del hombre argentino y de la sociedad que el justicialismo aspira para todos los habitantes de nuestro suelo.

No podemos plantear la cuestión universitaria en forma aislada; su reencauzamiento se logrará con la participación conjunta que el pueblo y el gobierno intenten realizar dentro del marco de las instituciones republicanas.

El principio expresado por el general Perón de que nadie puede realizarse individualmente en una comunidad que no se realiza vale como regla de oro para la universidad argentina.

Asimismo, quiero ratificar el pensamiento justicialista que expresara mi compañero de bancada, el diputado Torresagasti, en oportunidad de tratarse este proyecto el 11 de enero del corriente año. Nuestro bloque hubiese preferido que en esta etapa histórica del país la normalización universitaria se hubiera realizado, aunque más no sea transitoriamente, bajo el imperio de la ley 20.654, que en el año 1974 fue sancionada con el voto unánime del Honorable Senado y en forma casi idéntica por la Cámara de Diputados. (Aplausos).

Teniendo en cuenta las trabajosas coincidencias logradas —como ha manifestado el señor diputado Stubrin— a lo largo del tratamiento de este proyecto de ley en ambas Cámaras, y siguiendo el pensamiento del señor presidente de este cuerpo, quien señalara aquel día de enero que mejor que la memoria es el futuro, no voy a entrar en consideraciones históricas.

Sólo deseo formular una aclaración expresa. Al cobrar vigencia los estatutos universitarios que regían el 29 de julio de 1966 por la sanción de este proyecto de ley, los justicialistas no votamos los tristemente célebres decretos de la revolución antiperonistas de 1955 sino que confiamos una vez más en que al votar la autorización para establecer las modificaciones que se consideran necesarias, desaparecerán de ellos las disposiciones persecutorias y limitativas que aún se mantienen. Entendemos que actuando de esta manera contribuiremos a olvidar agravios y a afianzar la unidad nacional que nuestro pueblo tanto necesita. Por ello, adelanto nuestro voto favorable que surge de las expresiones vertidas en este recinto por los hombres de justicialismo y de las breves consideraciones expuestas respecto a qué es lo que queremos los justicialistas para nuestras universidades.

Deseamos que sean antioligárquicas, antiimperialistas y autónomas, y cogobernadas por todos sus estamentos para que puedan pelear sin interferencias por la grandeza nacional, para que a nadie le falte una trinchera para luchar por la emancipación mental de todos los argentinos. Indudablemente, todos los hombres que militamos en el campo popular estuvimos y estaremos de acuerdo con esos principios liminares de la vida universitaria.

Señor presidente: nuestras disidencias apuntan a dejar sentado el pensamiento justicialista en cuatro aspectos fundamentales: la participación de los no docentes en el gobierno de la universidad; la anulación de los concursos sustanciados y/o confirmados durante el proceso militar iniciado el 24 de marzo de 1976 y finalizado el 9 de diciembre de 1983; la reincorporación del personal docente y no docente cesanteado, prescindido u obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos y la derogación de la ley 21.536, de confirmación de profesores ordinarios.

Nuestro disenso en el primero de los casos, es decir, el derecho a la participación de los no docentes en el gobierno de la universidad...

Sr. Stubrin (A. L.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sella. — Quisiera terminar mi discurso.

Sr. Stubrin (A. L.). — Quiero señalar que el orador está entrando en la discusión en particular, señor presidente.

Sr. Presidente (Silva). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sella. — Decía, señor presidente, que el primer punto de nuestra disidencia se refiere a la posibilidad concreta de los no docentes de participar en el gobierno de la universidad.

Entendemos que es una justa reivindicación por parte de la universidad para más de 45 mil argentinos que trabajan y conviven con docentes, alumnos y egresados para que cada día tengamos una universidad más grande, más justa y popular, y a ello dedican sus mejores esfuerzos. (Aplausos.)

De esta manera creemos salvar una importante omisión en el decreto 154 del Poder Ejecutivo y en el texto que fuera aprobado por el Honorable Senado de la Nación. Esta omisión es, como digo, la de la participación de los no docentes en el gobierno de la universidad.

La última ley universitaria que aprobara el Congreso de la Nación estableció taxativamente esta participación, dirigida por supuesto a los asuntos de su competencia particular y específica. ¿Quién mejor que ellos para llevar al seno del Consejo Superior los problemas no académicos que les competen inmediatamente y las propuestas de solución que en buena medida serán los encargados de ejecutar? Entendemos que es ésta la oportunidad adecuada para salvar tal omisión, tendiendo así a que todos los sectores de la comunidad universitaria participen en nuestro país de la deseada normalización. No darles participación es negar el indudable hecho educativo que con su esfuerzo concretan en la universidad de nuestro tiempo. Ese principio indiscutible del hecho educativo, que tiene relación con la igualdad en la dignidad del trabajo —tan cara a nuestra formación ideológica—, no estamos dispuestos a dejarlo de lado y por ello solicitamos que esta Honorable Cámara de Diputados apruebe la participación de los trabajadores no docentes en el gobierno de la universidad. (Aplausos.)

Ratifico una vez más que en 1974, al votarse la ley 20.654, todos los sectores representados en el Parlamento argentino que contribuyeron a su sanción se pronunciaron positivamente en favor de este derecho que creemos debe institucionalizarse en forma definitiva.

La participación de la comunidad universitaria en la conducción de la universidad es conveniente, pero sin olvidar que el destino de aquella pertenece no sólo a sus integrantes sino, por sobre todo, al pueblo que la sostiene y al cual está llamada a servir. Se propone por ello que en los consejos superiores de las universidades y de sus unidades académicas participen en una adecuada proporción los estamentos que componen su respectivas comunidades educativas; docentes, no docentes, alumnos y egresados. Pero entendemos que en el futuro deberá preverse la formación de organismos consultivos de intervención obligatoria, donde se encuentren represen-

tadas la administración del Estado y las organizaciones sociales del pueblo argentino.

Nuestro disenso en el segundo de los casos se refiere a la anulación de los concursos sustanciados y/o confirmados durante el gobierno de facto. Quiero recordar aquí que las universidades argentinas vivieron, en los últimos años de la dictadura militar, un clima de terror y persecución que afectó por igual a profesores y alumnos. En ese clima de terror y persecución se llamó a concurso en todas las universidades argentinas bajo la vigencia de la ley 22.207, que hoy vamos a derogar por disposición de la ley que sancionaremos.

Cabe entonces que nos preguntemos si pueden quedar firmes los resultados de dichos concursos y con plena validez. Sinceramente, creemos que no. Creemos que, al igual que la anulación de la norma de facto 22.207, esta Cámara debe hoy aprobar la nulidad de los concursos de la dictadura. Todos sabemos que el gobierno de facto instrumentó los llamados a concurso en las universidades nacionales como una forma de lograr alguna continuidad en ese ámbito, cuando sus días estaban contados.

La discriminación política, ideológica y gremial circunscribió arbitrariamente la posibilidad de presentarse a ellos de una gran cantidad de docentes. Los servicios de información se convirtieron en el primer jurado para dictaminar aptitudes académicas. Los antecedentes políticos y gremiales fueron el filtro de aceptación o rechazo, previo a cualquier evaluación de antecedentes académicos. El clima de represión imperante limitó claramente las posibilidades y los deseos de muchos docentes de concursar para poder acceder a una cátedra.

La ilegitimidad de los concursos sustanciados y/o confirmados durante el gobierno de facto es manifiesta no requiere de mayores abundamientos. Si así lo declaramos haremos justicia, y sólo así todos los argentinos, sin distinción, tendrán la oportunidad de aspirar en esta Argentina libre y democrática de hoy a ocupar una cátedra por sus propias condiciones y capacidades y no por pertenecer a ese sector elitista y minoritario que acompañó al proceso de destrucción nacional que asoló a la República durante largos siete años. (*Aplausos.*)

Nuestro pensamiento en este aspecto reconoce las luchas del pueblo argentino y de sus instituciones. Para ratificar esto y no para polemizar, me voy a permitir citar algunas expresiones al respecto: el 14 de agosto de 1982 el doctor Antonio Tróccoli, actual ministro del Interior, declaraba textualmente a la prensa que no estaban dadas las condiciones para que todos los

docentes con aptitudes en el desempeño de la cátedra pudieran presentarse en situación competitiva en esos concursos, que pareciera que estaban dirigidos exclusivamente a armar un claustro de profesores amigos del rector y de los que constituían su entorno.

El doctor Alberto Constantini, actual director de la Comisión Nacional de Energía Atómica, declaraba el 17 de agosto de 1982 sobre este mismo tema: "Estos concursos adolecen de varios tipos de vicios y están ajustados a un estatuto que habrá que derogar. Sólo tratan de convalidar un período oscuro de la universidad".

El 30 de agosto de 1982, bajo el título de "Convocatoria para la Reconstrucción Intelectual y Moral de la Universidad Argentina", un grupo de intelectuales solicitaba a todos los partidos políticos que incluyeran en sus respectivos programas la cláusula expresa de revisar todo lo actuado en materia universitaria, anulando esos concursos falsos y restituyendo a sus cargos a los docentes que hubieran sido objeto de persecución. Firmaban esa declaración, entre otros, Alfredo P. Bravo, actual funcionario del Ministerio de Educación y Justicia; Gregorio Klimovsky, actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires; Ricardo Molinas, actual titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y Ernesto Sábato, presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

El actual ministro de Educación y Justicia, doctor Carlos Alconada Arau, en declaraciones al diario "Clarín" efectuadas el 26 de noviembre de 1982, se expresó también en contra de dichos concursos.

Finalmente, quiero recordar que la Federación Universitaria Argentina solicitó la derogación de la ley de la dictadura, la vigencia de la ley Taiana y la anulación de los concursos, en su declaración de Rosario del 4 de septiembre de 1982 y en su petitorio y declaración pública del mes de octubre de ese mismo año, declaración que es coherente con la que dicha entidad ha emitido la semana próxima pasada y de la cual se han hecho eco los medios de difusión del país.

En el diario "Tiempo Argentino", del jueves 7 de junio del corriente año, se puede leer en la página 8 lo siguiente: "La Federación Universitaria de Buenos Aires fijó ayer claramente su posición contraria a los concursos universitarios convocados por el gobierno militar. Para exigir la anulación de los concursos, la FUBA aludió en una declaración a las propias palabras del presidente Raúl Alfonsín, quien calificó de

autocrático el régimen consagrado por la ley 22.207 bajo cuya vigencia se realizaron los concursos.

"La organización estudiantil calificó al régimen de concurso anterior como un verdadero código de proscripciones y persecuciones para el desarrollo de la vida universitaria. Reclamó también la FUBA que los claustros docentes sean integrados por los más capaces, elegidos en un proceso de validez indiscutible, en cuyo desarrollo se respeten las libertades y garantías constitucionales, la más amplia libertad académica, la pluralidad de opiniones y la diversidad ideológica".

Al respecto, el Consejo Nacional del Partido Justicialista se expidió por la suspensión de los concursos del 27 de diciembre de 1982.

Similar petición formuló la Multipartidaria, la cual estaba integrada por la mayoría de los partidos que hoy se hallan representados en este cuerpo.

Optar hoy por utilizar la vía de la impugnación de los concursos a petición de parte interesada es optar por un camino tortuoso, lleno de idas y venidas, de dilaciones y ambigüedades, que no tienden a resolver el tema de la manera correcta, esto es, asumiendo el Parlamento elegido por el pueblo, la decisión política de anular los concursos del gobierno de facto.

En lo que se refiere a la duración en sus cargos de los docentes designados por concurso, de aquí en más estimamos que los períodos que proponemos apuntan a lograr que en un área como la del saber científico y tecnológico, donde las modificaciones son permanentes, desaparezcan los nombramientos vitalicios. No pueden existir en un régimen democrático designaciones de por vida.

Con respecto a la reincorporación del personal docente prescindido, cesanteado u obligado a renunciar por causas políticas, gremiales o conexas, entendemos que también merece una decisión por parte del Parlamento.

Optar porque cada universidad asegure la existencia de un régimen de reincorporación es mantener la situación que se viene dando desde la asunción del gobierno constitucional, caracterizada por una dilación exasperante en la resolución de los pedidos de reincorporación solicitados por los interesados, que inclusive no son todos los que tendrían que ser, en razón del desconocimiento público del sistema de reincorporación.

En ese articulado el justicialismo hace un agregado en cuanto al cómputo de la antigüedad de los reincorporados que sintéticamente dice:

"a todos los efectos". Tiene como objetivo dejar establecido claramente el reconocimiento previsional.

Respecto de la eliminación de los respectivos legajos personales de todo antecedente o constancia referida a las sanciones que deseamos corregir, la frase nos exime de mayores argumentos, pues significa diáfananamente la intención de terminar con la injusticia cometida.

Resolverlo de esta forma será para el Parlamento la mejor demostración de que aquí en la Argentina se quiere hacer justicia. En este caso particular, es la justicia contra todos los latrocinios cometidos en relación con los trabajadores de los claustros educativos.

No más demoras. No queremos organizar un régimen de reincorporación, sino que en forma inmediata se haga justicia con todas las víctimas que dejó la dictadura militar, lo cual se logrará con la urgente reincorporación de todos ellos. (Aplausos.)

Entendemos que no sólo debe derogarse la norma de facto 22.207, sino que esta Honorable Cámara debe hacerlo también con la norma de facto 21.536, confirmatoria de los profesores ordinarios, dando lugar así a una legislación coherente y clara, sin dejar puntos exentos de resolución.

Finalmente, sólo me resta ratificar que para el justicialismo el problema universitario es no simplemente académico; es un problema esencialmente político. Con ello queremos señalar que es una cuestión que se inscribe en la lucha de la Nación Argentina por su definitiva liberación nacional y dentro de la lucha contra nuestros enemigos de adentro y de afuera, es decir, contra la oligarquía y contra los imperialismos.

Señor presidente: esta universidad, a la que aspiramos, no está hecha y tampoco contribuiremos a hacerla si nos detenemos en 1918, en 1930, en 1955 o en 1976. Hacer esta universidad es tarea prioritaria de nuestra patria. Me refiero a una universidad nacional y popular. Esa tarea tenemos que iniciarla en forma inmediata y es por ello que hoy acordamos circunstancialmente un proyecto transitorio de normalización universitaria, para volver de inmediato sobre una definitiva ley universitaria para nuestra Nación.

Al dar nuestro voto favorable en las condiciones expuestas, los justicialistas una vez más damos prueba de anteponer intereses concretos de la Nación a las legítimas aspiraciones de nuestra fuerza política, orientadas a una universidad nacional y popular en aras de construir la grandeza de la patria y de la consolidación de la felicidad de nuestro pueblo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arbolaza. — Señor presidente, señores diputados: estamos considerando el régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales, que fue tratado en esta Cámara hace más de cinco meses. En aquella oportunidad, en nombre del bloque del Partido Intransigente, manifesté nuestra aprobación por el régimen instituido por el decreto 154/83 del Poder Ejecutivo, marcando las discrepancias fundamentales con respecto al artículo 8º, que determinaba que cada universidad debía establecer un sistema para revisar la aparente validez de los concursos realizados bajo el imperio de la ley de facto 22.207. En aquel entonces nos opusimos vehementemente a esta disposición contenida en el artículo 8º de la norma que he citado. En primer lugar, por razones de coincidencia con las precisiones de la plataforma electoral del Partido Intransigente, además de las distintas razones que los señores diputados vertieron en aquella reunión, donde con elocuencia se dejó tipificada la agresión que había sufrido la universidad argentina bajo el gobierno de la dictadura.

Ya ha pasado un tiempo bastante prolongado y esa posición inicial que mantuve se encuentra todavía en mi ánimo, mucho más ratificada por las circunstancias que he podido apreciar en contacto con las universidades, sus autoridades y las nuevas realidades de la República. Ahora, además de todas aquellas circunstancias que motivaron la posición del Partido Intransigente y mis intervenciones en esta Honorable Cámara, existe un total convencimiento de que el camino elegido no es el mejor para el futuro de la universidad argentina.

Estas impresiones pueden resultar insuficientes o parecer de menor cuantía ante las expresiones vertidas por mis pares. Pero es importante que la Honorable Cámara tome conocimiento de un pronunciamiento del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires efectuado hace pocos días y del que da cuenta el diario "La Nación" en su edición del 24 de mayo de la siguiente manera: "El Consejo Superior emitió una declaración acerca del tema, que fue aprobada por unanimidad, en la cual señala que la ley 22.207 «constituye un verdadero código de proscripciones y persecuciones para el desarrollo de la vida universitaria y por ende de la comunidad en su conjunto; asimismo, niega en los hechos la autonomía que por otro lado dice otorgar y no sólo desconoce la participación de los estudiantes y graduados en el gobierno de la universidad, sino que desvirtúa su actividad en

ese ámbito». Destaca seguidamente que los concursos para proveer cargos docentes se realizaron «en un marco general de arbitrariedad, persecución y corrupción», «se desconoció el principio de igualdad consagrado por la Constitución Nacional, al discriminar a algunos docentes y excluirse a otros» y finalmente que «las autoridades de facto aceleraron el trámite de sustanciación de los concursos desoyendo la solicitud expresa de numerosas organizaciones sociales representativas». Por esas razones, dice luego la declaración «la universidad debe encarar esa tarea reparadora» y asimismo «deben adoptarse las medidas necesarias para despejar todas las dudas que pesan sobre el resultado de aquellos concursos» y que «su solución constituye uno de los objetivos fundamentales de su tarea de normalización».

Señor presidente: éstas son las manifestaciones que en una sesión que tuvo lugar hace pocos días realizó el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Ellas me llevan aún más al convencimiento de que el camino que ha tomado la sanción del Senado de la Nación y que, dadas las manifestaciones del señor miembro informante, esta Honorable Cámara está dispuesta a ratificar, implica impedir que el Parlamento adopte la decisión política trascendente de dotar de ahora en adelante a la universidad de un sentido de igualdad y de legitimidad incuestionable. En efecto, la sanción del Senado establece un sistema de revisión de los concursos celebrados bajo el imperio de la dictadura.

Entendemos que se transfiere una responsabilidad propia del Parlamento al seno de la universidad; algo que deberá dilucidarse y que dará motivo a un sinnúmero de pleitos que complicarán la tarea de la universidad argentina. Yo entiendo que esta decisión la debe tomar el Parlamento; él debe reparar a la universidad argentina, en el verdadero sentido histórico de la palabra "reparación", como fuera utilizada por Hipólito Yrigoyen. Lo que nosotros necesitamos para la universidad argentina es adoptar una medida que permita legitimar a todos aquellos que, en nombre de esta nueva democracia que queremos construir, quieran revitalizarla; profesores a los que no se les pueda cuestionar su posición en los claustros universitarios.

Por eso, señor presidente, insistimos en nuestra posición, aun cuando nuestra voz no tenga la resonancia y la aceptación que quisiéramos.

Creo que en estos momentos trascendentes de la vida de la República, el Parlamento no

debe ceder facultades que le son propias; no debe transferir a otros organismos del Estado las facultades que le ha reservado la Constitución Nacional. Por eso, adherimos en términos generales a la sanción del Senado, pero por supuesto mantenemos las observaciones respecto de los artículos 9º y 10 porque entendemos que el Parlamento es el que debe reparar el daño sufrido por todos los claustros universitarios, como reparación de un daño producido a toda una generación de argentinos que estuvo perseguida en la universidad. Debemos producir el hecho político trascendente de anular los concursos universitarios.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Stubrin (A. L.). — Señor presidente, me veo obligado a hacer, aún en el debate en general, algunas precisiones acerca de lo manifestado por el señor diputado informante de la disidencia.

En primer lugar, creo que metodológicamente la existencia de disidencias ocultas conspira contra el trabajo fecundo de las comisiones. Nosotros no hemos tenido a la vista las disidencias y nos preocupa que no hayamos podido conocerlas en profundidad para poder aportar nuestra opinión.

Quiero decir también que nosotros hemos votado ya este proyecto de ley en su versión original; y en ese carácter hemos tenido discusiones profundas donde todos ejercimos nuestra función y pudimos expresar nuestras ideas al respecto.

Mucho de lo que aquí se dice figura en el Diario de Sesiones del 11 de enero. Esas ideas ya fueron consideradas por la Cámara y ya fueron resueltas. No entiendo por qué se insiste con los mismos temas, con los mismos argumentos, con los mismos tonos retóricos encendidos, para introducir a la consideración de la Cámara una idea que ya ha sido atendida, deliberada y resuelta con anterioridad.

Creo además que el hecho de haber sido ya resueltas algunas cláusulas del proyecto representa —por un principio elemental de seriedad en el ejercicio de las funciones legislativas— un antecedente de consideración obligatoria para todos los señores diputados, que lo conocen desde luego porque lo vivieron, y que además compromete como mínimo a hacer camino hacia adelante.

Se invoca en reiteradas oportunidades en estas intervenciones —y se proclama la adhesión a esa invocación— la frase que con tanto acierto pronunciara el señor presidente de la Cámara

en el sentido de que el futuro es mejor que la memoria. Yo la comparto, pero no veo cómo encaja esa frase en una pieza oratoria en la que luego se pasa a una larga retahíla de citas textuales de acontecimientos ocurridos con mucha anterioridad en la historia de la universidad argentina y del país; cómo se traen a colación bajo la invocación de esta frase prácticas políticas que la desmienten y que en cierto modo quisiera esclarecer, pues al respecto hay un uso selectivo de los alcances de la frase.

Con respecto a la parte general quisiera decir por último que estamos un tanto acostumbrándonos a la proclamación de que la unidad nacional es el motivo íntimo y sincero de nuestros actos de carácter político, y que nuestros pronunciamientos políticos responden a nuestra generosidad y a nuestra grandeza para dejar de lado las actitudes partidarias y entregarnos de lleno con alma y vida a este magnífico torrente de la unidad nacional. Está muy bien, pero lo que deseo fervientemente es que no lo proclamemos más, porque vamos a desgastar las palabras: simplemente practiquémosla y nos daremos cuenta los unos y los otros que efectivamente estamos cumpliendo con este objetivo de la unidad nacional. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Con relación a la cuestión de los no docentes en el gobierno de la universidad, ya se ha expuesto nuestra posición en esta Cámara. Hemos explicado suficientemente por qué tomamos los estatutos anteriores a 1966, que son resultado de la opinión de los propios universitarios. Aquéllos respetan primordialmente el principio de la autonomía y en ellos no está contemplada la participación de los no docentes. Este no es un pecado de desconocimiento de los derechos, de la madurez, del destino o del papel histórico de nuestro movimiento obrero o de nuestros trabajadores; es simplemente la circunstancia de que en la época en que fueron dictados ésa no era una idea que estuviera sobre el tapete en relación a la universidad o a la realidad nacional. Nadie la pedía. Convengamos en que ésa es una idea nueva, de fines de los años sesenta o principios de la década del setenta. De manera que es cierto que arrastramos la no definición del problema vinculado a la participación de los no docentes en el gobierno de la universidad con el recurso a los estatutos anteriores a 1966. Pero no es cierto que nos pronunciemos en contra de la participación de ellos, porque hemos manifestado con suficiente claridad que corresponde que se medite, se acerquen ideas y se considere este aspecto.

Este empuje que se da al planteamiento de la participación de los no docentes, reivindicando el debate de la ley 20.654 como expresión de la unión nacional, en mi modesta opinión no está bien sustentado, porque a través de las intervenciones de los señores diputados de la primera minoría, tanto en este como en el anterior debate, se dejó a salvo el hecho de que la participación que se solicitaba no estaba referida, en el gobierno de la universidad, a las cuestiones académicas. El sentido de la incorporación de los no docentes a la vida universitaria por medio de la ley 20.654 se basaba en el criterio —me cuento entre quienes lo sostuvieron— de la utilidad de dicha participación como contribución a la función académica de la universidad.

Más aún, la contradicción es evidente cuando el representante de la primera minoría señaló en su intervención algo así como que debemos reconocer la realidad contemporánea de la participación en el hecho educativo, que se concreta en el mundo actual con el aporte de los trabajadores.

No veo qué sentido tiene este reconocimiento si es para discutir el salario y las condiciones de trabajo. Esto significaría establecer una paritaria en el seno del gobierno de una institución autónoma que conduciría, por extensión, a reservar a los empleados de todas las reparticiones y poderes del Estado un lugar junto a los funcionarios públicos, a los mandatarios populares y a los magistrados, que en este sentido quedarían sometidos a un cogobierno integrado por sus propios empleados y sus propios auxiliares.

Con relación a la nulidad de los concursos voy a reiterar lo que manifestamos en el anterior debate. Es decir, las universidades deben ser las que, luego de un exhaustivo análisis, determinen el grado y alcance de la validez de los concursos celebrados durante la dictadura.

Resulta innecesario que se hagan citas referidas a manifestaciones públicas de nuestros dirigentes o de los órganos de conducción de la universidad que cuentan con mayoría de nuestro partido. Nosotros sostenemos que quienes deben realizar el análisis de los concursos que deban ser anulados en virtud de los principios derivados de la moral universitaria y la conveniencia académica, deben ser los propios universitarios, sobre la base de amplias facultades que les brinden la cobertura suficiente para trabajar con la necesaria seguridad jurídica, apuntalada adecuadamente por el Congreso nacional. En este sentido, el modo adecuado y suficiente

para hacerlo es resguardar mediante la ley el régimen de revisión propuesto en el decreto presidencial.

Yo no diría —como lo hizo el señor diputado Arabolaza— que con esta actitud estamos transfiriendo un conflicto a la universidad. Lo que estamos transfiriendo es una responsabilidad y, fundamentalmente, una atribución política, decisiva, importante y jerarquizada que la universidad sabrá utilizar correctamente. En definitiva, estamos confiando en su autonomía y en su madurez.

Tengo sobre mi banca —no porque la haya sustraído a la consideración de los demás señores diputados, sino porque es de muy reciente aparición— una resolución de la Dirección Nacional de Asuntos Universitarios en la cual se emite, para todas las universidades nacionales que se encuentran ante el problema de los concursos de la ley 22.207, una suerte de asesoramiento que en cierta forma anticipa la opinión del Ministerio de Educación con respecto a su comportamiento en relación al uso de la facultad de aprobación o de denegación de los regímenes de concursos surgidos en virtud del decreto presidencial.

Con esta resolución —cuya inserción en el Diario de Sesiones solicito— queda asegurado, en la hipótesis altamente probable de que las universidades dicten normas de un tenor similar a las de este asesoramiento, que la revisión de los concursos de la ley 22.207 será ecuaníme, imparcial, serena y seria, pero al mismo tiempo rotunda, penetrante y absolutamente rigurosa en resguardo de los principios de la vida universitaria que tan cruelmente fueron vulnerados durante la época de la dictadura militar.

Allí se contempla la designación, en cada facultad, de una comisión asesora que se dedique al análisis de estos concursos, compuesta por cuatro profesores y dos estudiantes designados con participación de los respectivos claustros, de intachables antecedentes, que se dedicarán a conocer uno por uno todos los concursos de la ley 22.207, aconsejando la anulación, en una fundamentación por escrito, en todos los casos en los que consideren que se han atacado —o rozado siquiera— algunos valores que es necesario proteger para la reconstrucción democrática de nuestra sociedad.

En el supuesto de que no hallaran objeciones suficientes en contra de estos concursos, de estos procedimientos de la dictadura, en cuanto a la inexistencia de impugnaciones, a la seriedad y normalidad del trámite, a la no violación de principios académicos y normas morales, jurídicas o de conveniencia académica, estarán en

condiciones de asesorar al consejo superior de su respectiva universidad para que los concursos no sean reeditados, porque se habrá configurado un fenómeno que no hará necesario repetirlos.

Este es un problema que no transferimos a las universidades, porque si a las actuales administraciones universitarias les damos la posibilidad de que una vez protegidos los principios y valores propios de la universidad ésta se ahorre la realización de concursos cuyos postulantes habrán de ser los mismos que participaron en los efectuados un año atrás, cuyos jurados muy posiblemente serán los mismos que actuaron hace un año y cuyos resultados —absolutamente previsibles— también serán los mismos, creo que esto es justo y que las exime de una carga innecesaria en esta época de transición. Sería una simplificación, un no entrar en honduras, que el Poder Legislativo dispusiera lisa y llanamente la anulación de todo lo actuado hasta el momento y —reitero— algo totalmente innecesario para las universidades nacionales.

En lo relativo a la incorporación de los cesanteados, constituye una acertada introducción efectuada por el bloque justicialista del Honorable Senado de la Nación, que nosotros admitimos. Todos sabemos que ellos han trabajado varios meses para encontrar las fórmulas que permitan conciliar los mecanismos de reincorporación. Pero curiosamente, esta conciliación no se realizó con el bloque oficialista sino con las bancadas minoritarias que estuvieron participando activamente en esta cuestión hasta lograr su aprobación por unanimidad en la Comisión de Educación del Honorable Senado; de manera que es cierto que el procedimiento puede ser opinable y puede estar olvidando algo porque es el resultado de un delicado compromiso político. Con esto no agotamos nuestras facultades legisferantes sino que simplemente estamos tratando de dar un régimen jurídico a la universidad argentina para suprimir de una buena vez esta ley 22.207 que tanto nos sentimos obligados a derogar.

Si bien es cierto que el régimen que propone el Senado de la Nación para la reincorporación de los docentes y no docentes cesanteados implica una demora, no es menos cierto que la no aprobación que se propicia en el día de hoy significa también una pérdida de tiempo. En consecuencia, este cambio de tiempo por tiempo, en aras de una fineza de redacción de la ley, no lo terminamos de entender.

Se menciona, asimismo, la derogación de la ley 21.536. Brillante idea, señor presidente; creo que es correcta y acertada, pero se trata de un

bloque que tiene más de cien firmas propias para presentar un proyecto de ley que la derogue. ¿Cuál es el objetivo de introducir esto en este momento cuando el proyecto viene en revisión del Senado y no en oportunidad de su primer tratamiento? Me ofrezco a firmar hoy mismo, al término de esta sesión, un proyecto de ley por el que se derogue la ley 21.536, pero no como obstáculo para derogar la ley 22.207 ni para la obtención de un régimen jurídico tan necesario para la universidad argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Silva).— Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Torresagasti.— Señor presidente: creo que la tarea del legislador es legislar y no abocarse a la crítica de la manera de expresarse o de la retórica de los señores diputados. Pienso que la vehemencia y las facultades afectivas, volitivas o intelectuales de los señores diputados no son el tema en discusión. Simplemente debemos atenarnos en la fundamentación a la mejor expresión del idioma castellano.

Entiendo asimismo que la democracia permite el debate crítico y también descubrir las intenciones que subyacen en las expresiones. La unidad nacional no pasa por la uniformidad, y el disenso es fundamental para la práctica de la democracia. Coincido totalmente en que la unidad hay que practicarla, y si es posible en silencio, pero respetando la opinión en ese disenso, que es la médula de toda democracia.

En la presentación que el bloque justicialista hizo el 11 de enero, fecha en que tratamos esta ley, hubo también disenso en particular, aunque aprobamos en general las intervenciones a las universidades porque considerábamos que constituían un arma elemental para el funcionamiento de las casas de altos estudios, que se encontraban en un conflicto institucional ante la renuncia de rectores y decanos. También se nos criticó en aquella oportunidad vehementemente cuando pedimos la derogación lisa y llana de la ley 22.207, punto en que ahora el Senado nos da la razón.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don Adam Pedrini.

Sr. Torresagasti.— En aquella oportunidad se nos negó esa derogación y la modificación del decreto 154, que también efectúa ahora el Senado.

Tenemos entonces el sano derecho de disentir y expresar nuestras postulaciones sobre modificaciones en particular, perfectamente coherentes con lo que expresamos el 11 de enero de este

año. En respeto a esa coherencia no pensaba tratar este tema, pero debo recordar que en aquella oportunidad el diputado preopinante, presidente de la comisión, expresó que se trataba de una ley transitoria y que el Poder Ejecutivo enviaría en sesiones extraordinarias el proyecto definitivo y de fondo. El señor diputado dijo que el Poder Ejecutivo así se lo había expresado.

Terminó, señor presidente, el período de sesiones extraordinarias, y la ley no llegó. Llamo entonces a la reflexión a todo este cuerpo, como ya lo hice ante el señor presidente de esta Cámara, doctor Pugliese, haciendo resaltar que ya hemos tardado prácticamente seis meses en el tratamiento de esta ley transitoria. Me pregunto entonces: ¿cuánto tardaremos en dictar la ley de fondo?

Sr. Stubrin (A. L.). — Yo también.

Sr. Torresagasti. — Tenemos todo el derecho a disentir y con ello no transitamos el camino de la oposición sistemática sino la reafirmación —vuelvo a expresar lo que sostuve anteriormente— de un principio de coherencia doctrinaria y filosófica elemental. Nosotros sostenemos la necesidad de la anulación de los concursos. Si hace seis meses se hubiera llamado a concursos nuevamente para llenar esas cátedras, no se hubiera perdido todo este tiempo recorriendo un camino que, para usar la expresión del señor diputado Sella, ¡es tan dificultoso!

El sentimiento de ayer de la Multipartidaria, el de la juventud argentina y el del bloque justicialista a este respecto, es el de manifestar a la opinión pública que la anulación de los concursos es una cuestión moral, porque si queremos la universidad de la liberación nacional no podemos iniciar la marcha en base a las estructuras dejadas por la dictadura.

Me pregunto si no sería un ejemplo para la juventud anular todo lo que hizo la dictadura militar, para iniciar un camino puro de la democracia en sustento de las instituciones y en defensa de los sagrados derechos que establece la Constitución Nacional.

Por eso, señor presidente, reitero que lo que nos planteamos es una cuestión moral. Así lo planteamos el pasado 11 de enero y lo reiteramos hoy. No se trata de una simple cuestión metodológica en cuanto a la mayor o menor pérdida de tiempo; aquí está en juego el ejemplo a una generación de que las dictaduras militares y los golpes de Estado no deben ser convalidados en lo más mínimo. Por eso sostenemos que la anulación de los concursos debe ser el método explícito y, al mismo tiempo, una respuesta a todos aquellos que han violado la

Constitución, para que la universidad de hoy se encamine en una dirección que no es la de anular a medias, pensar a medias y ejecutar peor.

Damos nuestro punto de vista positivo porque entendemos que no debe temerse a los concursos, ya que la periodicidad de la cátedra es un principio que sostenemos sin claudicaciones, así como la autonomía, la autarquía y el gobierno cuatripartito con la representación de los no docentes, que deben ser considerados como partícipes de la vida universitaria y no como ciudadanos de segunda categoría de la universidad. Creemos que deben participar en las cuestiones no académicas; no sólo —como se sostiene mediante una explicación simplista— en materia de convenios laborales sino también en las cuestiones de índole administrativa, que son muy importantes para la marcha de las universidades.

Reafirmamos nuestra creencia en esa unidad y no uniformidad, en ese gobierno cuatripartito y en la defensa sagrada de la anulación de los concursos, como un principio moral de ejemplo para la juventud argentina. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pedrini). — Si ningún otro señor diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la comisión, por el que se aconseja aceptar las enmiendas introducidas por el Honorable Senado.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pedrini). — En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pedrini). — En consideración el artículo 2º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pedrini). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sella. — Señor presidente: deseo proponer una modificación por una cuestión de técnica legislativa. Sugerimos que el artículo 3º se reubique como último artículo del proyecto de ley, inmediatamente antes del artículo de forma.

Sr. Stubrin (A. L.). — Pido la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (Pedrini). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Stubrin (A. L.). — Señor presidente: hemos señalado anteriormente que la Cámara debe contar con suficientes motivos para retornar un proyecto al Senado. Ahora pareciera que se lo quiere hacer retornar por cuestiones de técnica legislativa. Nos oponemos terminantemente a ello.

Sr. Presidente (Pedrini). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sella. — Señor presidente: proponemos que el artículo 3º quede redactado de la siguiente manera: "Deróganse las leyes de facto 21.536 y 22.207 y toda otra norma que se oponga a la presente".

Sr. Presidente (Pedrini). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Stubrin (A. L.). — No, señor presidente. He señalado en el curso del debate los motivos por los cuales no somos partidarios de la derogación, en este momento y en esta pieza jurídica, de las normas señaladas por el señor diputado representante de la primera minoría. Si somos partidarios de tal derogación por los modos propios de la labor legislativa ordinaria.

Sr. Presidente (Pedrini). — Se va a votar el artículo 3º.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pedrini). — En consideración el artículo 4º.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 5º, 6º y 7º.

Sr. Presidente (Pedrini). — En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sella. — Señor presidente: proponemos como redacción del artículo 8º la siguiente: "Cada universidad asegurará la participación en los consejos superiores provisorios a representantes de los claustros docente y no docente, determinando en ambos casos su número y las formalidades de su elección. La incorporación de docentes y no docentes se hará dentro de los sesenta días de promulgada esta ley. La participación de los no docentes estará limitada a los asuntos no académicos".

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Roberto Pascual Silva.

Sr. Presidente (Silva). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Stubrin (A. L.). — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Silva). — Se va a votar el artículo 8º.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — Proponemos como redacción del artículo 9º la siguiente: "Decláranse nulos, de nulidad absoluta, los concursos sustanciados en aplicación de la ley 22.207. Consecuentemente, los profesores que hubieren obtenido las titularidades y los cargos concursados continuarán en el desempeño de los mismos en comisión hasta tanto se efectivicen los nuevos concursos".

Sr. Presidente (Silva). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Stubrin (A. L.). — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sella. — Proponemos como redacción del artículo 9º la siguiente: "Dispónese la anulación de los concursos sustanciados y/o conformados durante el gobierno de facto, vigente entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983. Los concursos que estatuya en adelante cada universidad en ningún caso podrán exceder los cuatro años para la primera designación ni los ocho para las designaciones sucesivas por concurso para la misma cátedra, hasta el momento que se cumplan los términos previstos para el retiro obligatorio por edad de su titular".

Sr. Presidente (Silva). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Stubrin (A. L.). — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Silva). — Se va a votar el artículo 9º.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sella. — Señor presidente: proponemos como redacción del artículo 10 la siguiente: "Cada universidad reincorporará al personal docente y no docente prescindido, cesanteado u obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos, reconociendo las categorías al momento de la baja y computándose la antigüedad a todos los efectos hasta el momento de su efectiva reincorporación, eliminándose de sus respectivos legajos personales todo antece-

dente o constancia referidos a las sanciones que se corrigen por este artículo. El plazo para reasumir las funciones no deberá exceder los 60 días de promulgada la presente ley".

Sr. Presidente (Silva). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta a la redacción del artículo 10?

Sr. Stubrin (A. L.). — Por los resultados del debate y las razones expuestas en el mismo, no aceptamos la modificación.

Sr. Presidente (Silva). — Se va a votar el artículo 10 tal como aparece redactado en el dictamen de la comisión.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 11 es de forma.

Sr. Presidente (Silva). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley ¹.

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

Sr. Presidente (Silva). — Se va a votar si se efectúa en el Diario de Sesiones la inserción solicitada por el señor diputado Stubrin.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Silva). — Se hará la inserción solicitada ².

19

EXPRESION DE SATISFACCION POR EL ACUERDO SUSCRITO EL 7 DE JUNIO

Sr. Presidente (Silva). — Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor diputado Ferré y otros por el cual se manifiesta la satisfacción de la Honorable Cámara por el acuerdo suscrito entre las fuerzas políticas del país y el Poder Ejecutivo.

Por Secretaría se dará lectura del texto de dicho proyecto.

Sr. Secretario (Belnicoff). — Dice así:

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1º — Manifestar su más amplia satisfacción por el acuerdo suscrito el día 7 de junio de 1984 entre las más importantes fuerzas políticas del país y el Poder Ejecutivo nacional, en el entendimiento que el mismo es un eficaz instrumento para la consolidación de la unidad de la Nación y la vida democrática, adhiriendo a los

términos del mismo como síntesis de la doctrina nacional que ha de guiar los pasos futuros del gobierno argentino.

2º — Invitar a todas las fuerzas que componen el cuerpo social de la Nación a adherir en su accionar a esta propuesta surgida de los partidos políticos argentinos, ya que en su activa participación en las soluciones de los graves problemas del país ha de contribuir eficazmente en el ejercicio de una auténtica democracia.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En prueba de la madurez alcanzada por el pueblo argentino en su lucha en pro de la defensa de las instituciones, los máximos dirigentes políticos han suscripto el pasado 7 de junio un documento que promueve la unidad nacional y sienta las bases para un accionar común, en procura de cumplir con los grandes objetivos nacionales.

Tras largos años de desencuentros y enfrentamientos estériles, las fuerzas nacionales se han puesto de pie en defensa de la justicia social y la voluntad popular, esencias de la democracia.

Es por eso, señor presidente, que el Congreso nacional debe adherir a tan magno acontecimiento, ya que sus integrantes expresan la representación del pueblo, y por lo tanto no pueden permanecer ajenos a las necesidades del mismo, que han sido precisamente expresadas en la firma del histórico documento.

Firman el proyecto los señores diputados Ferré, Gurioli, González Cabañas, García (R. J.), Dovená, de la Vega de Malvasio, Rigatuso, Jaroslavsky, Zubiri y Rabanal.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferré. — Señor presidente: los argentinos asistimos días pasados a un acto de civismo que debe enorgullecernos, por el cual las principales fuerzas políticas llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional, representado por el Poder Ejecutivo, fijándose las pautas fundamentales para encarar los graves problemas que la Nación tiene que resolver de aquí en adelante.

Si los comicios que devolvieron a la vida republicana al pueblo argentino constituyeron un importante acto cívico, el acuerdo que acaba de lograrse con la participación de la casi totalidad de las fuerzas políticas, representadas por diecisiete partidos políticos, resulta evidentemente la reafirmación de la fe democrática que tenemos los argentinos. Asimismo es un acto de responsabilidad cívica, enderezado a que encontremos los elementos necesarios para que los grandes problemas nacionales empiecen a caminar por el sendero que los va a conducir a su definitiva solución.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 1568.)

² Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 1570.)

INSERCIONES

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO STUBRIN (A. L.)

Buenos Aires, 28 de mayo de 1984.

Visto el estado institucional de las universidades nacionales, y la necesidad de avanzar con respecto a lo establecido en el decreto 154/83 (artículo 8º) y supeditando a la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación Argentina del precitado decreto, y

CONSIDERANDO:

Que el gobierno constitucional ha recabado de los distintos sectores de la comunidad universitaria opinión con respecto a los concursos docentes realizados bajo el imperio de la ley 22.207;

Que en atención a dichas consultas y teniendo en cuenta lo reiteradamente manifestado por las actuales autoridades constitucionales sobre la materia, estimamos necesario poner en conocimiento de las actuales autoridades de las respectivas universidades nacionales las mismas, a los efectos de colaborar para que procedan a elaborar el proyecto de régimen para la revisión de los concursos docentes realizados bajo el imperio de la ley 22.207 (artículo 8º decreto 154/83), que debe ser aprobado por el Ministerio de Educación y Justicia (artículo 8º decreto 154/83);

Que a los efectos de asesorar debidamente, hemos sistematizado las opiniones que transcribimos en el

anexo I que pasa a formar parte de la presente disposición.

Por ello,

El director nacional de Asuntos Universitarios

DISPONE:

Artículo 1º — Poner en conocimiento de las respectivas autoridades de las universidades nacionales las opiniones sistematizadas en el anexo I que forma parte de la presente disposición.

Art. 2º — Regístrese, comuníquese y archívese. — Doctor *Hugo Storani*, director nacional de Asuntos Universitarios.

Disposición 048/84

ANEXO I

Artículo 1º — De conformidad con lo establecido en el artículo 8º del decreto 154/83, "revisar la aparente validez de los concursos realizados bajo el imperio de la ley 22.207", el Consejo Superior Provisorio designará una Comisión Asesora de revisión de los concursos, ley 22.207, la que estará constituida por:

- a) El decano o director de la unidad académica, con carácter de presidente, quien votará sólo en caso de empate;
- b) Cuatro (4) profesores o ex profesores o investigadores o profesionales del más alto nivel e idoneidad, propuestos por el decano, quien requerirá previa opinión del Consejo Académico Consultivo. Uno de esos cuatro (4) integrantes podrá ser un docente no profesor;
- c) Dos (2) estudiantes, que deberán tener aprobadas la mitad más una de las materias del plan de estudio, propuestos por el Centro de Estudiantes reconocido por la unidad académica.

Igual número de miembros y con los mismos procedimientos serán designados como subrogantes para el supuesto de excusación, recusación, licencia o cese de los titulares.

Art. 2º — Será función de la Comisión Asesora examinar la validez aparente de los concursos realizados bajo el imperio de la ley 22.207, entender en la oposición o impugnación de parte interesada en los términos del artículo 3º de esta reglamentación y pronunciarse acerca de si en la tramitación y aprobación de los concursos se vulneraron normas jurídicas, tradiciones académicas de legalidad o valores de ética univer-

sitaria. Deberá emitir dictamen fundado con el voto de la totalidad de sus integrantes, sesionando válidamente con seis (6) de sus miembros.

Art. 3º — La Comisión Asesora recibirá impugnaciones de parte interesada —aspirante a participar de los próximos concursos de oposición— en la que se exprese y acredite que el presentante tiene derecho o interés legítimo afectados. Comprobado ese extremo la Comisión Asesora pronunciará sobre el particular.

Art. 4º — La Comisión Asesora deberá expedirse sobre la totalidad de los casos a examen hasta treinta (30) días después de agotado el término a establecer para la presentación de impugnaciones de parte interesada.

Art. 5º — Por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión Asesora podrá aconsejarse la declaración de la innecesidad de la reiteración del concurso, atendiendo a los méritos y antecedentes acreditados por el profesor, a la ausencia de impugnaciones atendibles y a la consideración de que resulta impropia la realización de un nuevo concurso.

Art. 6º — El Consejo Superior Provisorio, dentro de los treinta (30) días de recibido el dictamen, resolverá el asunto. Deberá fundarse y obtener la mayoría absoluta de los miembros presentes para resolver en sentido contrario al aconsejado por la Comisión Asesora. Se escuchará, antes de resolver, al profesor involucrado, quien tendrá vista por cinco (5) días a partir del dictamen de la Comisión Asesora, en los casos en que éste le sea desfavorable.

Art. 7º — Resuelta la aprobación del dictamen que declare la validez del concurso, se mantendrá al profesor en el cargo ajustando su designación a los alcances del estatuto universitario en vigencia.

Art. 8º — En el caso en que el Consejo Superior Provisorio resolviera la reedición del concurso, en el mismo acto se realizará el llamado a concurso en el cargo correspondiente con ajuste a la normativa vigente. Esta resolución será apelable ante el Ministerio de Educación y Justicia con efecto meramente devolutivo.

Art. 9º — Si el dictamen de la Comisión Asesora no contiene observaciones de oficio al concurso ni hubiere atendido a impugnaciones, pero tampoco arribare a la declaración de validez, el Consejo Superior Provisorio podrá en resolución fundada adoptar la solución prevista en el artículo 7º o la contemplada en el artículo 8º del presente régimen.

Art. 10. — A los fines de que el proceso de revisión de los concursos, ley 22.207, adquiera el necesario conocimiento en el país y en el extranjero, se realizará la pertinente publicidad.